



MASSIMILIANO MINOCRI

## Huelga parcial de 'bus' sin incidentes

Transportes Metropolitanos de Barcelona cifró en el 13,2% el seguimiento de la huelga parcial convocada ayer en los autobuses por varios sindicatos para presionar en las negociaciones del convenio colecti-

vo. El paro, que no registró incidentes, tuvo un seguimiento escaso según diversos usuarios consultados. La huelga representa el primer conflicto laboral al que se enfrenta Ada Colau como alcaldesa.

# Colau propone congelar los impuestos y tasas municipales

CLARA BLANCHAR, **Barcelona**  
No hay sobresaltos en el proyecto de ordenanzas fiscales que ayer presentó el Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona que capitanea Ada Colau. El primer teniente de alcalde y responsable de Economía, Gerardo Pisarello, defendió un proyecto que

prevé congelar los impuestos (el IBI, un gesto inédito en 25 años) y tasas, aplicar bonificaciones sociales y ambientales e implementar una nueva tasa para los rodajes en el espacio público. La oposición criticó una propuesta que pasará la primera prueba en la comisión de Economía del lunes.

El primer proyecto de ordenanzas del Ejecutivo de Colau no incluye la tasa a las eléctricas por ocupación del espacio público que prevé el plan de choque de Barcelona en Comú. No se ha incluido en estas ordenanzas por su complejidad jurídica y de competencias, explicó el gerente del área de Economía, Jordi Ayala, pero la intención es que figure en las de 2017.

Pisarello defendió un proyecto basado en la congelación, que vin-

culó a la buena salud de las finanzas del Consistorio y a la "sensibilidad" social y ambiental del Gobierno. El responsable de Economía insistió durante la presentación de las ordenanzas en que la propuesta "es un punto de partida" que se negociará con los grupos de la oposición, que ya han hecho propuestas "cuya música suena bien".

Se refirió a ideas como la del PSC de no cobrar impuestos a los emprendedores durante el pri-

mer año de actividad. Pero la concejal socialista Montserrat Ballarín manifestó su temor a que la congelación de 2016 tenga una repercusión negativa en las cuentas municipales de 2017. En la misma línea se expresó Sònia Recasens (CiU), que declaró que "la música de las ordenanzas no suena bien". La antecesora de Pisarello se mostró "decepcionada" por la falta de novedades y "preocupada" por si la revisión del catastro iniciada por Colau puede suponer una

"fuerte subida" de cara al año que viene.

Ciudadanos, por boca de la presidenta de su grupo municipal, Carina Mejías, y el PP, a través del concejal Eduardo Bolaños, lamentaron que el Ejecutivo no aproveche la buena salud de las finanzas de Barcelona para rebajar impuestos. Por su parte, el jefe de filas de ERC, Alfred Bosch, afirmó que la ordenanza es mejorable en cuanto a bonificaciones y "contribuciones progresivas para que paguen más quienes más tienen".

La revocación de la subida del 10% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI, que este año supone una recaudación de 648 millones de euros) que propuso el exalcalde Xavier Trias (CiU) ya fue anunciada en julio, cuando el gerente Jordi Ayala explicó que el Ayuntamiento iniciaba una revisión del catastro que busca favorecer a los barrios de menor renta. Ayer, los responsables de Economía explicaron que el proyecto de ordenanzas amplía las bonificaciones para familias numerosas o con hijos discapacitados y las subvenciones a familias numerosas que viven de alquiler o monoparentales. Son facilidades que cuestan a las arcas municipales 200.000 euros, "que se verán compensadas de sobras con las nuevas tasas", dijo Ayala.

## Fiscalidad ambiental

En el caso de las tasas, explicó Pisarello, "la filosofía es no tocar las que afectan al bolsillo del ciudadano corriente, como la zona azul o la grúa, y si actualizar las que gravan actividades lucrativas, como los rodajes de anuncios" o la escolta en maniobras de transporte de vehículos especiales por la ciudad. La propuesta prevé también un nuevo impuesto, de *desenganche* de la mitad del importe de la grúa, para los conductores que encierran a la grúa retirando su vehículo.

Y sobre lo que el Gobierno municipal califica de "fiscalidad ambiental y de fomento de las energías renovables", se trata de bonificaciones en el impuesto de vehículos para los menos contaminantes o de hasta el 95% del impuesto de construcciones u obras que incorporen sistemas de aprovechamiento de energía solar.

## La Generalitat se abre ahora a estudiar una renta infantil

CAMILO S. BAQUERO, **Barcelona**  
Una ayuda mensual de 205 euros para los 1,8 millones de catalanes menores de 18 años. Así es la Prestación Económica Universal para la Crianza (PEUC) propuesta por la Federación de Entidades de Atención y de Educación a la Infancia y la Adolescencia (Fedaiia). La idea volvió a ser presentada ayer en el foro anual del ente y la Generalitat se abre ahora a "estudiarla".

Las entidades sociales no tienen una buena experiencia pidiendo implementar ayudas similares. La Mesa del Tercer Sector solicitó al presidente Artur Mas en julio de 2014 una nueva ayuda mensual de 465 euros para las 34.000 familias sin ingresos. Mas se negó alegando problemas económicos. Implicaba dedicar 15 millones de euros mensuales.

Implementar la PEUC, avalada por expertos y en la línea de lo que hacen otros países europeos, costaría unos 3.500 millones de euros al año. Se reduce a los 2.415 millones si se resta lo que se destina a becas comedor y de transporte, que se compactarían.

La vicepresidenta Neus Munté intervino ayer en la inauguración del foro sin referirse a la prestación. A preguntas de los periodistas, afirmó que la idea de la prestación "es rigurosa y está avalada por estudios". "Cuando mejore la financiación este es un proyecto prioritario", dijo.

En campaña, Junts pel Sí criticó el coste de la PEUC si bien aceptó que era el camino a seguir. "Cuesta lo mismo que pagamos por Mossos, hospitales y universidades", dijo en un debate de Fedaiia Agnès Rusiñol (ERC). La coalición lleva en su programa la implementación de una renta garantizada, que mejore la actual de ayuda de inserción.

# El Gobierno catalán reclama a ATLL que rebaje un 0,7% el precio de su agua en 2016

DANI CORDERO, **Barcelona**  
La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha preparado una propuesta para que Aguas Ter-Llobregat (ATLL) rebaje sus tarifas el próximo año. Tras analizar el pliego de condiciones de la concesión, el organismo dependiente de la Generalitat considera que la compañía privatizada puede reducir el próximo año en torno a un 0,7% el precio del agua que vende a las suministradoras finales que operan en la región metropolitana de Barcelona y que son las que sirven hogares y empresas. La idea no es del agrado de ATLL, gestionada por

un consorcio liderado por Acciona, que considera excesivo el abaratamiento de la tarifa planteado por la ACA. Fuentes de la sociedad evitaron desvelar cuál es su propuesta para 2016 e indicaron que se trata de "la tramitación ordinaria de una revisión de tarifas". Previsiblemente, la modificación saldrá de un acuerdo entre ambas partes. La reducción es testimonial si se tiene en cuenta que en los últimos tres años ATLL ha subido sus tarifas más de un 70%.

ATLL ya tiene sobre la mesa la propuesta de la Administración catalana, si bien ésta se tra-

tará en el seno del Consejo de Red Ter-Llobregat en una reunión prevista para principios del mes de noviembre. Ya se tendría que haber aprobado en la última. La decisión definitiva la tendrá que aprobar unos días después la ACA. Sus efectos se aplicarán a partir del 1 de enero.

Fuentes del sector consideraron lógica la rebaja propuesta. Se basan en la fórmula polinómica utilizada para decidir las tarifas del agua de ATLL, basadas principalmente en tres factores: la primera es la inflación, que al cierre del mes de septiembre reflejaba una reduc-

ción del 0,5%; otra son las inversiones realizadas y que se tienen que amortizar durante el contrato de privatización, de momento escasas; y la tercera sería el consumo del agua, que en 2015 ha vuelto a crecer, frente a ejercicios anteriores, en los que se había reducido.

La decisión de rebajar el agua de ATLL tendrá un discreto reflejo en las facturas que pagan los consumidores. En el caso de la sociedad mixta controlada por Agbar y que suministra a la mayor parte de la población del Área Metropolitana de Barcelona, el agua que le compra a AT-

LL —que complementa a la de los pozos propios— supone una tercera parte de sus gastos, lo que se tendría que traducir en una rebaja del 0,2% en el capítulo de agua consumida del recibo.

En todo caso, esa reducción quedará bloqueada totalmente si la Generalitat aplica otra subida en el canon del agua, otro de los elementos que marcan el coste final del agua. Fuentes del sector aseguraron ayer que la ACA plantea un aumento del 1,5% de esa tasa —que financia el mantenimiento y la construcción de infraestructuras hidráulicas— para el próximo año, extremo no confirmado por el ACA, que podría aprobar esa medida el próximo 12 de noviembre. La efectividad de esa medida está sujeta a la aprobación de los Presupuestos del próximo año de la Generalitat, cuyo próximo Ejecutivo está en el aire.